

## ENSAYO

### COMENTARIOS SOBRE EL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD CON ARGENTINA\*

Sergio Gutiérrez Olivos\*\*

El Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, firmado en 1984 dentro del marco de la mediación papal, ha sido objeto de variadas reflexiones. El embajador Gutiérrez sitúa el acuerdo en su dimensión histórica y lo analiza desde la perspectiva del Derecho Internacional. La actitud argentina —dice el autor—, a lo largo de las negociaciones desde 1881 hasta el fin del proceso, ha respondido más a consideraciones geopolíticas que jurídicas. De tal manera que en el trabajo se repasan las teorías que mayor influencia han tenido en la evolución de la posición argentina en el conflicto limítrofe con nuestro país. En último término y a manera de sugerencias de tareas para el futuro, se presentan algunas formas de cooperación, especialmente en el área científico-tecnológica.

Este discurso de incorporación se limitará a formular algunos comentarios sobre ciertos aspectos del Tratado de Paz y Amistad celebrado por Chile y Argentina en 1984, que fue promulgado por ambas repúblicas en mayo último.

Todo hace aconsejable no pretender abarcarlo en su totalidad: la complejidad y amplitud de los asuntos de que trata; la hondura de sus raíces en la historia de nuestra agitada vecindad; el hecho de que lo acordado provenga de una mediación conducida por el Sumo Pontífice, cuyo desarrollo es conocido sólo por pocos; y, finalmente, la brevedad del tiempo que esta Academia acuerda a quienes invita a sentarse en su cenáculo.

Quizá convenga enunciar desde luego una consideración que

\* Discurso de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias Sociales. 8 de agosto de 1985.

\*\* Abogado, ex director de la Escuela de Derecho y profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Chile. Ex embajador en Argentina y Estados Unidos.

Autor de varios libros, entre los que destaca *Subdesarrollo, Integración y Alianza para el Progreso* (Emecé, Bs. As. 1964).

presidirá el examen del Tratado de 1984 y sus antecedentes. Ella se resume en recordar que el tiempo histórico difiere con frecuencia del tiempo cronológico. Por ejemplo, ¿cabe duda acerca de que el periplo de "las luces" que predominó durante los siglos XVIII y XIX terminó en Europa con el fratricidio cometido, en el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial? A la vista de lo que está ocurriendo por obra de la explosión científica en los campos del saber y de las relaciones humanas, incluyendo las internacionales, ¿resultaría aventurado vaticinar que algún historiador del futuro reputará que "la edad antigua" se extinguió el 6 de agosto de 1945, cuando en Hiroshima el hombre rindió pavorosa cuenta de haber arrebatado al Sol el enigma de su poder?

Desde una perspectiva aplicada al marco de las cuestiones entre Chile y Argentina, pienso que el Tratado de Paz y Amistad felizmente concertado hace poco, pone fin, ya tarde en el siglo XX, a conflictos que subsistían como un fardo anacrónico del siglo anterior.

"El pasado es prólogo" escribió Shakespeare en *La Tempestad*.

Procedamos, pues, a esbozar el pretérito de los asuntos de que se ocupa el Tratado de Paz y Amistad.

### El "Uti Possidetis Juris de 1810"

Al emanciparse del dominio español, las repúblicas hispanoamericanas desconocían la mayor parte del espacio que abarcaban sus respectivos territorios. Durante los tres siglos en que habían sido meras subdivisiones administrativas de la Corona, ésta había cambiado a menudo las jurisdicciones que les atribuían en el papel de las reales cédulas. Digo "en el papel" porque la realidad geográfica del inmenso espacio americano permanecía en su mayor parte inexplorada y, por ende, la cartografía llamada a ilustrar lo dispuesto por la Corte era correspondientemente incierta.

Sobrevenida la Independencia, al crear la república de Bolivia, Simón Bolívar recurrió a la misma noción que España y Portugal habían empleado en un Tratado de 1750 para reglar el diferendo que mantenían sobre el reparto de las cuencas interiores del Amazonas y el Paraná y el Archipiélago de Filipinas. Dicha noción provenía de un edicto del Derecho Romano dirigido a proteger la posesión de un inmueble, que en latín se enunció así: *uti possidetis ita possideatis*, lo cual significa "continúa poseyendo como poseáis". Adoptando como guía el concepto jurídico inspirador de tal edicto, Bolívar atribuyó a la nueva nación sudamericana los límites territoriales que había asignado la Corona a la ex Audiencia de Charcas.

El recurso empleado por el libertador suscitó un consenso entre los padres de nuestras patrias, quienes lo erigieron en principio político para delimitar sus fronteras. Advertidos, sin embargo, que el edicto romano amparaba la posesión efectiva (que en el caso de

Hispanoamérica resultaba con frecuencia sólo virtual o simbólica) se le agregaron las partículas *juris* de 1810.

Para no alargar, el principio pasó a significar algo que, en esencia, designa lo siguiente: "Continuad poseyendo como teníais derecho a poseer en 1810". La indicación del año se debió al acuerdo en proclamarlo como el de la consecución de nuestra Independencia, no sin incurrir en una apreciable distorsión cronológica, cabe observar.

En suma, el principio del *uti possidetis juris* de 1810, que ya a mediados del último siglo se vería revestido del carácter de un dogma jurídico-político, entrañaba no pocas discordancias con la realidad. Con todo, visto en la perspectiva de la época, su mérito principal radicó en expresar la común determinación de proclamar que, a partir de la Independencia, aquí no subsistían territorios que cupiera reputar *res nullius*, esto es, tierras sin dueño abiertas a la codicia o la acción reivindicatoria de las potencias europeas.

Vencidos con solidario patriotismo los ataques que, en efecto, provinieron del Viejo Continente, llegaría el momento en que estas repúblicas hubieron de abocarse a precisar el alcance del principio del *uti possidetis* aplicado a la distribución de sus respectivas soberanías.

Tal vez por haber sido la primera ex colonia que logró constituirse en "una república en forma", Chile no tardó en apreciar que la invocación del principio suponía la existencia de una condición de hecho: la posesión material.

Como es sabido, O'Higgins murió balbuceando el nombre de un destino: Magallanes. Un tiempo antes, luego de triunfar en Yungay, el general Bulnes le había escuchado en Montalbán discurrir largamente sobre la necesidad vital que para nuestro país representaba asegurar el dominio del estrecho.

Elegido Presidente a su regreso del Perú, Bulnes y sus ministros Yrarrázaval y Montt empeñaron lo mejor de sus esfuerzos en la obra. En 1843, un puñado de marinos, hombres de ciencia, algún aventurero buen conocedor de los canales fueguinos y unos cuantos chilotos que tripulaban la goleta "Ancud", fundaron Fuerte Bulnes, al oriente de la cordillera de los Andes en la ribera norte del estrecho de Magallanes y establecieron allí una colonia.

Cuatro años después, el "gaucho" José Manuel de Rozas, quien por entonces era dueño y señor de la Confederación del Plata, protestaría de la toma de posesión por Chile, aduciendo que fuerte y colonia habían sido instalados en la Patagonia, de propiedad argentina.

La cimiento de la frondosa secuela de disputas con nuestros vecinos, había caído en el surco.

La escasez de tiempo exige remontar la espesura a grandes zancadas y sólo en procura de la senda que conduce al Tratado de Paz y Amistad de 1984.

La protesta de Rozas fue contestada por Chile invitándolo a

que expertos de ambos países definieran el desacuerdo surgido respecto de la recta inteligencia que correspondía dar a los títulos coloniales de una y otra nación sobre la Patagonia.

Buenos Aires replicó con expresiones de amistad acompañadas del requerimiento de dejar el asunto en suspenso hasta que Argentina lograra resolver los graves conflictos internos y externos que por entonces afligían al "gaucho". Sólo al cabo de 8 años llegó a Chile el Ministro Plenipotenciario Carlos Lamarca. No traía una proposición para superar la diferencia, sino un proyecto de convenio que, tras las negociaciones de rigor, fue suscrito el 30 de agosto de 1855. Es el denominado Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación de 1855, que se propuso promover la navegación, la industria y el comercio entre estos países sobre una base de amistad y reciprocidad, a fin de resguardar "la paz inalterable y la amistad perpetua entre ambos gobiernos".

Dos artículos de ese temprano instrumento estarían llamados a jugar un papel determinante en el curso posterior de las relaciones chileno-argentinas.

El Artículo 39 afirma la mutua admisión de la doctrina del *uti possidetis*. Luego reserva las cuestiones de límites "que han podido o pueden suscitarse sobre esta materia para discutir las después, pacífica y amigablemente, sin recurrir jamás a medidas violentas y, en caso de no arribar a un completo arreglo, someterlas al arbitraje de una nación amiga".

El Artículo 40 fija la duración del Tratado en doce años prorrogables. Pero, de suerte que resulta de veras asombrosa para la época, enseguida añade que dicho plazo no regirá para la obligación de resolver pacífica y amigablemente las contiendas de límites o, en su caso, someterlas a arbitraje, pues el Tratado será a este respecto "perpetuamente obligatorio".

Las tentativas por aclarar los límites en función del *uti possidetis* llevaron a un largo y erudito debate sobre los títulos coloniales. Los juristas chilenos invocaron derechos sobre la Patagonia, el estrecho de Magallanes y la región insular hasta el cabo de Hornos. Argentina les negó valor y afirmó que el límite se registraba únicamente en la cordillera de los Andes.

Además, la discusión diplomática iniciada en 1865 no superó el "impasse" jurídico. Hacia 1878 había cobrado tal acritud y llevado a tal frustración que ambos países se asomaron al borde del precipicio bélico. Por fortuna, primó al fin la sensatez presidida por el propósito de la paz convenida a perpetuidad en 1855, lográndose celebrar el Tratado de Límites de 1881.

Este Tratado se propuso "resolver amistosa y dignamente" la controversia provocada por el dogmático aunque impreciso principio del *uti possidetis*.

Sus artículos I, II y III fijan los límites entre Chile y Argentina. El Artículo I estipula que:

"El límite entre Chile y la República Argentina es de Norte a Sur, hasta el paralelo 52 de latitud, la cordillera de los Andes. La línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras que dividan las aguas y pasará por entre las corrientes que se desprenden a un lado y otro.

El Artículo II adscribe el límite en la parte austral del continente a una línea divisoria de este a oeste al norte del estrecho de Magallanes (línea "Dungeness-Andes"), y dispone que:

"Los territorios que quedan al Norte de dicha línea pertenecerán a la República Argentina, y a Chile los que se extiendan al Sur, sin perjuicio de lo que dispone respecto de la Tierra del Fuego a islas adyacentes el artículo tercero".

El Artículo III, luego de haber dividido la Tierra del Fuego en una sección argentina al este y una chilena al oeste, reparte las islas de la manera siguiente:

"En cuanto a las islas, pertenecerán a la República Argentina la isla de los Estados, los islotes próximamente inmediatos a ésta y las demás islas que haya sobre el Atlántico al oriente de la Tierra del Fuego y costas orientales de la Patagonia; y pertenecerán a Chile todas las islas al sur del canal "Beagle" hasta el cabo de Hornos y las que haya al occidente de la Tierra del Fuego".

El Tratado de 1881 fue una transacción entre las pretensiones de las dos partes. Esto es, la disputa sobre el alcance de la aplicación del *uti possidetis* y la imprecisión de alguno de los títulos coloniales invocados por las partes, las indujeron a no insistir inflexiblemente en sus pretensiones y a tratar de armonizarlas mediante mutuas concesiones.

Como se desprende de las estipulaciones transcritas, la polémica de fondo concernía una gran extensión de la Patagonia, el estrecho de Magallanes y el conjunto de islas situadas al sur del mismo.

La transacción de 1881 comprendió todas estas materias. Importó, en último término, la renuncia de Chile a gran parte de la Patagonia al norte de la línea Dungeness-Andes, a cambio de obtener el reconocimiento de la totalidad del estrecho de Magallanes y las islas al sur del mismo, salvo únicamente una sección de la isla de Tierra del Fuego y las islas situadas frente a sus costas orientales, que fueron atribuidas a Argentina.

El objetivo fundamental de la transacción de 1881 consistió en alcanzar una solución territorial completa y definitiva.

Así lo señaló el Artículo VI del Tratado al decir:

"Los gobiernos de Chile y de la República Argentina ejercerán pleno dominio y a perpetuidad sobre los territorios que respectivamente les pertenecen según el presente arreglo".

Sin embargo, acorde al espíritu de lo prevenido en 1855, agregó:

"Toda cuestión que, por desgracia, surgiere entre ambos países ya sea con motivo de esta transacción ya sea de cualquiera otra causa, será sometida al fallo de una potencia amiga, quedando en todo caso como límite inmovible entre las dos repúblicas el que se expresa en el presente arreglo".

El sentido de esta disposición es claro: los territorios atribuidos a las partes por el Tratado quedarían bajo su "pleno dominio y a perpetuidad". Si alguna cuestión surgía entre ellas con motivo del Tratado, o por cualquiera otra causa, sería sometida al arbitraje de una potencia amiga, pero este fallo no podría modificar o alterar en manera alguna el límite convenido, ya que éste continuaría siendo el "límite inmovible" entre los dos países.

En suma, desde 1881, el título de las respectivas jurisdicciones territoriales de las partes pasó a ser la precisa transacción pactada ese año, en lugar de las imprecisas disposiciones reales a que se remitía al principio del *uti possidetis*.

Por espacio de unos veinte años no se suscitó discrepancia alguna acerca del pleno dominio que el Tratado atribuía a Chile sobre las islas situadas al sur del canal de Beagle hasta el cabo de Hornos. Nuestro país otorgó concesiones para la explotación de las islas mayores y estableció signos aparentes de dominio en otras. En ambos países fueron publicados numerosos mapas que ilustraron fielmente lo convenido.

Entre los que vieron la luz en Argentina, reviste singular importancia el entregado en diciembre de 1881 por don Bernardo de Irigoyen, canciller de ese país, al ministro británico en Buenos Aires, Sr. George Petre, a fin de que éste explicara a su gobierno el acuerdo logrado con Chile. En aquel mapa, las islas Picton, Lennox y Nueva, y todo el resto de las islas e islotes que conforman el archipiélago del cabo de Hornos, aparecen destacadas con el color con que el propio canciller argentino eligió distinguir los territorios de dominio chileno. Ese mapa fue publicado pocas semanas después de la suscripción del Tratado. El constituye, pues, un documento de valor irrefragable para establecer lo que efectivamente entendió y acordó el Ministro de Relaciones Exteriores trasandino que presidió durante años las negociaciones que culminaron en la celebración del Tratado de 1881, que lo suscribió en representación de su Gobierno y que, en seguida, lo defendió ardorosamente ante el Parlamento de su país, hasta obtener su aprobación y ratificación.

Hay muchos otros mapas y documentos de procedencia argén-

tina que confirman la misma percepción de lo convenido, pero no hay aquí ocasión de mencionarlos.

### Diferendo Sobre la Región del Canal de Beagle

Sólo a principios de este siglo surgió en el país vecino un planteamiento divergente sobre la interpretación de lo acordado.

El no provino de una fuente oficial, sino de la inventiva de un aventurero que, a la sazón, se empeñaba en continuar extrayendo la riqueza aurífera existente en la zona. Se llamaba Julius Popper y contaba con buenos amigos en Buenos Aires. Así consiguió que se le escuchara en la Sociedad Geográfica de Buenos Aires. Sostuvo allí que el canal de Beagle no seguía el recto curso descrito ante la Sociedad Geográfica de Londres por el capitán King, comandante de la expedición inglesa que descubrió el canal y que desde entonces figuraba en todas las cartas náuticas en uso.

Según Popper, el canal de Beagle, en lugar de ser recto a todo lo largo, torcía en su boca oriental bruscamente hacia el sur oriente, para pasar entre las islas Nueva y Lennox. Así, las islas Picton y Nueva quedaban situadas al norte del canal "torcido" y, por ende, pertenecían a Argentina.

El hallazgo del Sr. Popper encontró cierto apoyo en la Armada vecina, a raíz de los sondeos que efectuó el capitán Sáenz Valente a bordo del crucero "Almirante Brown". Tales sondeos habrían indicado que la línea de las mayores profundidades del canal en esa parte correspondería a lo aventurado por el Sr. Popper.

Con todo, tomó tiempo antes de que la "tesis Popper" se abriera paso al Palacio de San Martín.

El hecho es que en 1904, la Cancillería argentina indicó a la nuestra su interés por que se definiera cuál era, en efecto, el eje más profundo del canal. Atendida la letra del Tratado, lo entendido y coloreado por sus negociadores y firmantes, la descripción hecha por el descubridor inglés y las indicaciones contenidas en toda la cartografía náutica de uso universal, Chile no atribuyó a tal petición mayor trascendencia.

Sin embargo, en el año 1915, vale decir 34 años después de la fecha del Tratado que definía el "límite inmovible" de la vecindad, ciertos actos jurisdiccionales realizados por Chile en la zona fueron objetados por Argentina.

Recién entonces quedó planteado oficialmente el diferendo sobre la región del canal de Beagle.

Entretanto, los dos países habían suscrito en 1902 los célebres Pactos de Mayo, en vísperas de que el sagaz rey Eduardo VII dictara sentencia en el pleito sometido a su arbitraje sobre la correcta demarcación de la traza fronteriza continental convenida en 1881.

Los Pactos de Mayo de 1902 incorporaron muy valiosos instrumentos para la mantención de la paz entre ambos países. Uno de ellos consistió en el primer acuerdo de desarme formalizado en el mundo moderno.

Otro, en un Tratado General de Arbitraje que detallaba el cumplimiento de lo prevenido al respecto en los tratados de 1855 y 1881. En él se designó arbitro al Gobierno de S. M. Británica para todas las controversias que las partes no pudiesen solucionar directamente. Las cuestiones sobre las cuales versara una disputa serían determinadas por las partes y, a falta de acuerdo entre ellas, cualquiera podría recurrir unilateralmente al arbitro para que definiera la controversia y señalara el procedimiento a seguir en el pleito. El arbitro debía decidir de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, a menos que se lo autorizara para actuar en equidad. El laudo sería inapelable y su cumplimiento quedaría confiado "al honor de las naciones" signatarias. Por excepción, se admitió que cualquiera de ambas podría solicitar la revisión de la sentencia, pero exclusivamente por dos causales: a) La de haber sido ella dictada a resultados de un documento falso o adulterado; o bien, b) La de contener un error de hecho que fuese de manifiesto en las actuaciones o documentos del juicio.

El Tratado General de Arbitraje de 1902 estaría llamado a tener una importancia decisiva en el diferendo sobre la región del canal de Beagle que, por aquella época, todavía no sobrepasaba el recinto de la inventiva del Sr. Popper.

Pero, como se ha dicho, planteada oficialmente su teoría en 1915, Chile accedió a someterla al arbitraje inglés convenido en 1902. Aquel primer protocolo no recibió la aprobación de las respectivas legislaturas.

Al parecer, por entonces la "tesis Popper" aún no lograba demasiados adeptos, ni siquiera en Argentina. Así lo demuestra el hecho de que en 1918, un personaje de la autoridad detentada por el perito Francisco P. Moreno, el hombre clave en el pleito sobre la demarcación continental laudado por Eduardo VII, entregara al ministro británico en Buenos Aires, Sir Reginald Tower, un memorándum en el cual decía: "No atino a explicarme por qué el Gobierno argentino pretende hoy soberanía sobre las islas Picton, Nueva, Lennox, etc., fundándose en los tratados vigentes, es decir, en el de 1881 y en el protocolo de 1893, cuando el primero de ellos lo invalida para tal pretensión y el segundo nada tiene que ver con la demarcación en el canal de Beagle. Insisto: la mención en el Tratado de 1881, con excepción de la isla de los Estados, le hará perder un pleito tan malamente planteado. . . También repetiré que la excepción que hace el Tratado de 1881 con la isla de los Estados, que reconoce como argentina, no permite poner en duda la propiedad chilena de las tierras situadas tanto al sur de la isla de la Tierra del Fuego como al sur del canal de Beagle".

Sin embargo, en el debate interno entre la tesis del aficionado Sr. Popper y la opinión del eminente perito argentino Moreno, al quien bien colocado terminó por favorecer la primera.

El hecho es que el asunto fue replanteado a Chile en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo acuerdo alcanzado en



1938 designó arbitro al Procurador General de los Estados Unidos, Sr. Homer S. Cummings. En representación de Chile fue suscrito por mi padre, José Ramón Gutiérrez Alliende, en su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Alessandri Palma. El Sr. Cummings falleció antes de entrar a desempeñar el cargo. Argentina adujo que su designación había sido deferida a la persona y no al rango. . . y allí quedó la cosa durante casi 30 años.

Un tercer intento para resolverla, esta vez entregando su decisión a la Corte Internacional de Justicia, tuvo lugar en 1960 durante el mandato del Presidente Alessandri Rodríguez. Su gestión fue dirigida por el Canciller don Germán Vergara Donoso, a quien con justicia muchos consideran una de las figuras señeras en la conducción de nuestras relaciones exteriores durante este siglo. En representación de Chile, suscribió el protocolo correspondiente el hijo del Sr. Gutiérrez Alliende, a la sazón Embajador de Chile en Buenos Aires. El instrumento sometía la disputa a esa Corte, pero la restringía al dominio de las islas Picton y Nueva, pues Argentina reconocía desde luego la soberanía chilena sobre Lennox. Aquel protocolo tampoco pudo prosperar. El formaba parte de un conjunto de otros acuerdos, uno de los cuales consultaba el otorgamiento de ciertas facilidades de navegación para los barcos de bandera argentina por rutas predeterminadas de nuestros canales australes. Este encontró seria resistencia en algunos sectores parlamentarios y de nuestra Armada.

Asimismo, la suscripción del conjunto de protocolos de 1960 coincidió con un momento en que la pugna entre los sectores castrenses argentinos y el Presidente Frondizzi hacía crisis. Para salvar la subsistencia del régimen constitucional, el Excmo. Sr. Frondizzi estimó del caso realizar un viaje a la Antártida y renovar allí la proclamación de soberanía de su país sobre el sector que, como es sabido, se superpone en ciertos grados geográficos con el reclamado por Chile. El inoportuno discurso antártico del mandatario argentino tuvo efectos devastadores en nuestro medio. La discusión parlamentaria del protocolo relativo al asunto del Beagle, que ya había progresado hasta obtener su aprobación por la comisión correspondiente del Senado, fue aplazada de inmediato y, en efecto, sine die.

Pese a todo, el compromiso perpetuo contraído en 1855 de solucionar amigablemente o mediante arbitraje cualquier diferendo—que se había repetido en el Tratado de Límites de 1881 y reglamentado en el Tratado General de Arbitraje de 1902—aunque objeto de constantes embates, no desfallecía en el ánimo de los hombres de buena voluntad.

En las postrimerías del período del Excmo. Sr. Alessandri, el Canciller Julio Philippi logró enderezar hacia el arbitraje del Gobierno británico la cuestión surgida en la zona del Palena-Río Encuentro. Asumido el mando por el Presidente Frei, largos esfuerzos por lograr otro tanto respecto del diferendo sobre la región del canal de Beagle resultaron desesperantemente infructuosos, por lo cual Chile

resolvió al fin recurrir por sí solo al arbitro, según lo autorizaba el Tratado General de 1902. Aunque nuestro vecino logró demorar por varios años que se constituyera el arbitraje, en julio de 1971 se allanó a suscribir el compromiso correspondiente.

A diferencia de los acuerdos que habían sometido a arbitraje los pleitos sobre la demarcación fronteriza continental (1898) y sobre la zona del Palena-Río Encuentro (1965), las estipulaciones del compromiso de 1971 descendieron hasta el último detalle. En lo substancial, debido a las reservas argentinas acerca de la imparcialidad del arbitro inglés, las partes convinieron en la designación de una Corte Arbitral compuesta de cinco jueces pertenecientes al Tribunal de La Haya. Su selección fue el producto de dilatadas deliberaciones. La decisión de la Corte Arbitral debía dictarse en estricto derecho y sobre cada una de las cuestiones que le sometieran las partes, indicando determinadamente sus fundamentos. Al Gobierno de Su Majestad sólo se reservó la facultad de aprobar o rechazar la decisión de la Corte Arbitral. En caso de aprobarla íntegramente, tal sería el laudo. En caso contrario, no habría fallo. Por aplicación de lo prevenido en el Tratado General de Arbitraje de 1902, la sentencia sería inapelable, si bien cualquiera de las partes podría pedir su revisión fundándose en las precisas causales de falsificación o adulteración de documentos o error determinante mencionadas más arriba.

El juicio arbitral iniciado en 1971 duró seis años. Comprendió diversas etapas procesales, que incluyeron una inspección de la Corte Arbitral a la zona en litigio, alegatos orales, etc. Terminado el procedimiento, la Corte emitió en febrero de 1977 una decisión unánime en favor de la tesis chilena. Todas las islas comprendidas en la controversia pertenecían a nuestro país. Dicha decisión adquirió el carácter de laudo inapelable al ser sancionada poco después por S. M. Isabel II.

Apenas notificado el laudo a las partes, el gobierno de la revolución argentina emitió un comunicado anunciando que se proponía examinar si lo fallado afectaba o no a "los intereses vitales de la nación". A escasos días del vencimiento del plazo de nueve meses fijado en el laudo para su cumplimiento o, en su caso, para pedir su revisión, el mismo gobierno comunicó por nota que había "decidido declarar insanablemente nula. . . la decisión del arbitro". Agregaba que, por consiguiente, no se consideraba obligado a cumplirla, ni reconocería "la validez de ningún título que invoque la República de Chile sobre la base del laudo arbitral".

La nota fue acompañada de un memorándum sin firma denominado "Declaración de Nulidad", que Chile rechazó categóricamente.

Tal nota consta de cinco capítulos, cada uno de los cuales enuncia diversas razones para pretender justificar la insólita declaración. Resultaría demasiado extenso y por demás ocioso detenerse en el examen de su mérito jurídico. Bastará remitirse a la opinión

que el documento mereció a una de las mayores eminencias del Derecho Internacional contemporáneo, el profesor Charles Rousseau, de la Universidad de París, quien escribió: "La Declaración de Nulidad de fecha 25 de enero de 1978 es un instrumento de diez páginas dactilografiadas que prueba hasta la evidencia que ciertos almirantes sudamericanos tendrían gran necesidad de seguir cursos nocturnos de Derecho Internacional".

A principios de siglo, el Presidente argentino Figueroa Alcorta fue llamado a arbitrar una controversia territorial entre Bolivia y Perú sobre la cual sentenció el 9 de julio de 1909. El gobierno de La Paz formuló ciertas reservas respecto de la validez de lo resuelto por considerar que el Excmo. Sr. Figueroa se había excedido en la competencia recibida de las partes. La reacción argentina fue pronta e implacable. Invocando la fuerza obligatoria de cosa juzgada que el Derecho Internacional respetado por "las naciones civilizadas" reconocía, desde el tiempo de Grocio, a las sentencias arbitrales, señaló no considerar "compatible con su dignidad seguir manteniendo relaciones amistosas con el Gobierno de Bolivia". En consecuencia, procedió a retirar de inmediato a su agente diplomático en La Paz e indicar que, dentro de 24 horas, el Ministro boliviano acreditado en Buenos Aires debía, a su vez, hacer lo propio.

Interesa, asimismo, recordar que hasta la primera parte de esta centuria, tanto en las conferencias de La Haya, como en los cónclaves panamericanos, Argentina fue uno de los campeones de la idea de que toda controversia no resuelta directamente por las partes debía someterse a arbitraje.

¿Cómo se explica, pues, que el gobierno de un país con credenciales semejantes haya incurrido en el desprestigio y en el desperdicio de declarar, por sí y ante sí, que el laudo confirmatorio de la decisión unánime adoptada por cinco jueces del más alto tribunal internacional, adolecía de "nulidad insanable"?

Para intentar responder a esta pregunta es preciso salir del terreno del Derecho.

## Geopolítica Versus Derecho

En efecto, la respuesta ha de encontrarse en una teoría geopolítica que, a mediados de este siglo, fue enunciada con cruda claridad por el almirante Gastón A. Clement, jefe del Estado Mayor de la Flota de Mar argentina, más tarde Ministro de Marina.

En una conferencia pronunciada en la Base Naval de Bahía Blanca, dijo en 1948 el almirante Clement:

"Argentina, desde el punto de vista geopolítico, es dueña de todo el estrecho de Magallanes, de sus canales derivados y de todo el Beagle. Los tratados internacionales de 1881 y los protocolos posteriores con Chile no tienen mayor alcance, porque se trata de necesidades de la nación argentina, impuestas a ella

por su propia naturaleza geográfica y por la configuración del extremo austral del continente. El cono sur de América es argentino por obra de la naturaleza y las discusiones en que se entretienen algunos internacionalistas y juristas, tanto de Chile como de Argentina, no pueden destruir los hechos, más poderosos que todas las argumentaciones de la geografía del extremo sur de América. El dominio austral de América lo ha entregado la configuración geográfica del continente a la nación argentina, y resulta pueril que la Marina de Guerra argentina pueda aceptar otra posición que no sea la del imperio irrestricto y absoluto de la soberanía en el extremo austral de nuestro continente".

Conceptos similares fueron formulados en la época por el capitán de Navío J. A. Dellepianne, profesor de Estrategia Naval y Geopolítica en la Academia de Guerra Naval; el almirante Teodoro Hartung, jefe del Estado Mayor de la Armada argentina; el coronel Manuel A. Olascoaga, profesor de Geopolítica en la Academia Militar del Estado Mayor del Ejército argentino, y otros.

La perturbadora influencia que ejercieron tales planteamientos en las gestiones diplomáticas para solucionar la "única controversia" que las partes admitían subsistir, acorde al Tratado de 1881, respecto de la región del canal de Beagle, me correspondió comprobarla de primera mano en 1959, cuando desempeñaba la Embajada en Buenos Aires. En medio de las negociaciones para concertar el arreglo pacífico tan reiteradamente buscado desde 1915, recibí del Canciller, don Diógenes Toboada, una nota por la cual proponía encomendar a la Corte Internacional de Justicia que determinara "a cuál de las partes contratantes corresponde la soberanía, al este del meridiano 67° 13' longitud oeste de Greenwich, sobre las islas Picton, Nueva, Lennox e islotes adyacentes; islotes Terhalten, Sessambre, Bamevelt, Evout e islas y porciones de islas de los archipiélagos Wollaston y Terhalten, que se sitúan al oriente del meridiano de Cabo de Hornos".

En cumplimiento de instrucciones recibidas del Ministro Vergara Donoso, rechacé terminantemente el intento de ampliar el ámbito de aquella "única controversia" pendiente. Respondí, en suma, que Chile consideraba del todo inadmisibles que, con ocasión de negociaciones para dar a dicha controversia una solución judicial, se pretendiera extender la cuestión definida desde 1915, a otra que jamás había estado en discusión, de proporciones muy superiores y de imprevisibles consecuencias.

Luego de gestiones nada fáciles, por último se obtuvo que el embajador argentino en Santiago retirara la nota que había formulado la inaceptable proposición.

Hay otras indicaciones coetáneas al episodio relatado que dan a entender que el nuevo "credo" de las cúpulas geopolíticas del país vecino todavía no concluía de ser aceptada, ni siquiera por los altos

mandos castrenses. Así lo da a entender el hecho de que un decreto dictado en 1957 por el Presidente general Aramburu y su Ministro de Interior, quien era nada menos que el almirante Isaac Rojas, haya definido el territorio argentino de Tierra del Fuego e islas del Atlántico sur, refiriéndolo expresamente "a los límites fijados por el Tratado de 1881".

Sin embargo, no por las derrotas diplomáticas ni por la falta de aceptación de su "credo" por el gobierno nacional, desfallecerían el empeño y el ingenio de los geopolíticos para imponer su doctrina en feligreses más dóciles.

Así, en abril de 1970, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur publicó en el boletín regional un decreto que colocaba bajo su jurisdicción "las islas Picton, Lennox y Nueva, las ubicadas sobre el canal de Beagle y aquellas que se extienden hasta el cabo de Hornos al este del meridiano que lo cruza".

Por tratarse de un acto administrativo de un funcionario subalterno, que se apartaba de lo señalado en el decreto anterior del Gobierno Federal, nuestro país abrigó durante un tiempo la confianza de que éste desharía el entuerto. Como no ocurriera así, en 1971, días antes de que fructificaran las negociaciones conducentes a la celebración del compromiso arbitral de ese año, Chile reclamó por nota que se procediera a la rectificación correspondiente. Esta nota sólo fue respondida dos años más tarde, ya iniciado el proceso arbitral ante Isabel II. La respuesta rechazó nuestro reclamo, pues sostuvo que la zona objetada constituía "un área estrechamente vinculada al presente arbitraje en curso".

Por vía paralela a la prosecución del juicio, entre las cancillerías se produjo a continuación un intercambio de notas. Chile afirmó, como correspondía, que habiéndose determinado con absoluta precisión en el compromiso la zona sujeta a arbitraje, no cabía reputar que cualquiera otra le perteneciera por "vinculación". Además, el Palacio de San Martín adoptó la siguiente postura: el decreto del gobernador de Tierra del Fuego era de fecha anterior al compromiso. Por consiguiente, debía presumirse que, al suscribirlo, Chile estaba impuesto de que las pretensiones de su Gobierno iban, en efecto, más allá de la controversia definida en aquel instrumento. En conclusión, aunque este último no mencionara las islas e islotes del archipiélago del cabo de Hornos, al oriente del meridiano del mismo nombre, Chile debía aceptar que el diferendo los incluía.

La nota argentina en la cual se desarrolla tan asombroso silogismo, lleva la misma fecha en que ambas partes debían presentar a la Corte Arbitral sus respectivas memorias en el pleito.

De esta manera, a través de notas ajenas al juicio, nuestra Cancillería se impuso de la victoria que en la república vecina habían logrado quienes, desde hacía años, venían postulando que a su país pertenecía por imperativo geopolítico toda la flecha territorial en que termina el sur de este continente.

La apreciación anterior no es el producto de una mera inducción desde el efecto anotado a su causa probable.

Un libro publicado el año último en Buenos Aires por don Juan Archibaldo Lanus, ex funcionario de la Cancillería argentina y profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, revela lo ocurrido, que repetiré en síntesis.

Los juristas extranjeros que integraban el equipo de la defensa argentina en el pleito del canal de Beagle, los profesores Roberto Ago, Robert J. Jennings y Paul Reuter, de las universidades de Roma, Cambridge y París, respectivamente, recomendaron desde el inicio abandonar las pretensiones sobre la isla Lennox, acorde a lo ya admitido en el Protocolo de 1960, pues en cualquiera de las variantes relativas al curso del canal, dicha isla quedaba situada al sur y pertenecer, por ende, a Chile. La recomendación fue rechazada. En cambio, desde el Gobierno se ordenó que la defensa se construyera en torno al reclamo de soberanía resultante del "principio atlántico" con todas sus consecuencias.

La tarea que recayó sobre la defensa argentina de construir un andamiaje jurídico ad-hoc que pudiera sostener "el principio atlántico" fue improba y, como era de suponer, resultó en definitiva estéril, a juicio unánime de la Corte Arbitral.

Esto último unido a la elemental consideración que merecen tanto el tiempo disponible como la composición de un auditorio en el que no escasean personas ajenas a la disciplina del Derecho, excusarán que no me detenga en el examen de cada uno de los argumentos desplegados por aquella defensa para intentar cumplir su imposible cometido.

Digo "imposible" porque los conocimientos y la acucia de los abogados a cargo de construir jurídicamente "el principio atlántico", no sólo tuvieron que vérselas con la grave deformación que él pretendía introducir en el texto del Tratado de Límites de 1881 y la manifiesta intención de sus contratantes, sino también con una tan patente como extravagante innovación de la geometría terráquea.

Así lo deja ver el diálogo producido entre el presidente de la Corte Arbitral, Sir Gerald Fitzmaurice, y el profesor Roberto Ago, miembro del equipo defensor argentino, durante uno de los alegatos orales del pleito.

He aquí su transcripción:

"El presidente: Señores, para comprender bien la posición argentina respecto del cabo de Hornos: observo que el meridiano del cabo de Hornos corta las islas Wollaston, corta las islas principales de Wollaston, las islas Herschel y, aun, el propio cabo de Hornos. ¿Cuál es el concepto que tiene Argentina del límite en el cabo de Hornos, considerando este meridiano y que él corre dejando tierra a un lado y otro?"

"Sr. Ago: Me es grato responderle a este respecto, señor. Creo

que probablemente no es completamente exacto creer que la posición del Gobierno de Argentina es que el límite sea el meridiano del cabo de Hornos. La posición del Gobierno de Argentina es que el cabo de Hornos es el punto extremo del límite".

"El presidente: ¿Qué ocurre inmediatamente al norte del cabo de Hornos?"

"Sr. Ago: ¿Al norte del cabo de Hornos?"

"El Presidente: En las islas Wollaston, por ejemplo".

"Sr. Ago: No creo que haya duda alguna en el concepto del Gobierno de Argentina: ellas son de Chile. La posición de Argentina es que las islas 'sobre el Atlántico' son las islas en bordure, como dice, de la costa exterior. El Gobierno de Argentina no contempla la idea de una línea totalmente vertical. En nuestra opinión, la posición del Tratado es que éste atribuye a Argentina las 'islas sobre el Atlántico', no las islas al oriente del meridiano, o sea, la línea vertical, el meridiano del cabo de Hornos. Por supuesto que existe una proximidad —una semejanza— entre las dos; pero estamos en verdad conscientes del hecho de que la cláusula final del Artículo 3o. del Tratado jamás menciona una línea, vertical u horizontal; solamente deja ciertas islas a Argentina y ciertas otras islas a Chile y que el límite debe correr en forma que deje las islas orientales a Argentina y las occidentales a Chile".

"El presidente: Pero, entonces, en el caso de un grupo como el de las islas Wollaston que está, podría decirse, a ambos lados, ¿qué ocurre, entonces, como grupo? Quiero decir: si Ud. considera todo el grupo de las islas Wollaston, ¿lo parte en dos y entrega la mitad, la parte oriental a Argentina y la parte occidental a Chile o qué?"

"Sr. Ago: Bien. No creo que el Gobierno de Argentina cuestione ese grupo en forma alguna. Creo que debería conocer mejor cuál es la posición jurídica del Gobierno mismo, pero no creo que el Gobierno de Argentina tenga la idea de reclamar una de esas islas de este Artículo".

El diálogo, que Sir Gerald no deja de salpicar con ciertas gotas de humor británico, según habrán advertido, posee la virtud de economizar cientos de argumentos para dejar en claro la sinrazón de la tesis argentina.

En efecto, para resolver en su favor, la Corte habría debido aceptar no sólo que el recto canal de Beagle era "torcido", sino también que los meridianos terrestres, en singular el que cruza la isla cabo de Hornos, por su parte se desajustaba de la geometría universal, para entrar a describir inéditos circuitos y semicírculos. Todo ello con el exclusivo propósito de acoger el mandato geopolítico reclamado por uno de los litigantes.

Para enlazar esta parte de mis comentarios con los siguientes, bastará citar rápidamente los titulares,

Pronunciada la decisión arbitral adversa al "principio atlántico", sancionada ella por Isabel II y notificado el laudo a las partes,

Chile fue pronto en darle cumplimiento mediante la dictación de un decreto que fijó "las líneas de base rectas" a partir de las cuales, según el Derecho Internacional vigente, corresponde medir las extensiones marítimas que pertenecen en propiedad o usufructo al estado ribereño, cuando se da el caso de costas tan quebradas y sinuosas como son las de nuestros archipiélagos australes.

A su debido tiempo, acorde a lo prevenido en el Compromiso, la Corte Arbitral, luego de dejar constancia de haberse extinguido el plazo para recurrir de revisión en contra de la sentencia, declaró que Chile la había cumplido íntegramente como procedía en Derecho (con lo cual confirmó la justeza de nuestro Decreto sobre "líneas de base rectas"), y dictaminó que los pronunciamientos argentinos para "rechazar y pretender anular el laudo. . . deben tenerse por nulos y desprovistos de toda fuerza o efectos jurídicos". Esta decisión de la Corte fue seguidamente ratificada por el arbitro, S. M. Isabel II.

En suma, la declaración de "nulidad insanable" fue descalificada por adolecer ella misma de nulidad absoluta en Derecho, por resoluciones de la Corte y del arbitro.

Ante estas decisiones arbitrales, el gobierno de la revolución argentina escogió proseguir tres estrategias: a) la una dirigida a enervar el ánimo de su opinión pública en contra de Chile; b) la otra, a demostrar la superioridad bélica que le era dable poner en ejecución, si insistíamos en respetar lo resuelto por el laudo arbitral, y c) paralelamente a las dos anteriores, enviar ciertas "señales", como suelen decir hoy los politólogos, para indicar la buena disposición de los sectores "moderados" de aquel gobierno a negociar alguna suerte de arreglo directo que nos preservara del ataque que aprestaban los sectores "duros".

El efecto combinado de estas tres estrategias no favoreció el pronóstico que han de haberle atribuido sus autores.

El hecho es que tanto en la reunión privada de los presidentes Pinochet y Videla en el aeropuerto militar de Plumerillo (próximo a Mendoza), como en la sostenida por delegaciones de ambas partes en la ciudad de Puerto Montt, la posición chilena no varió un ápice: lo sentenciado por el laudo tenía y continuaría teniendo inalterable fuerza obligatoria; de haber alguna negociación, ésta sólo cabría referirse a la delimitación de los espacios marítimos que proyectaban, según el nuevo Derecho del Mar, los territorios isleños cuya propiedad de siempre el laudo había reconocido a Chile.

La persistencia chilena en no abandonar el campo del Derecho enfureció a la dirigencia de los "duros" transandinos.

En homenaje al auspicioso futuro que promete el Tratado de Paz y Amistad recién promulgado, prefiero omitir el recuerdo de los instantes que, a fines de 1978, parecieron aproximarnos a lo insano.

Un deber de conciencia me mueve a expresar aquí la conclusión a que me han conducido las no escasas investigaciones en que fundo este trabajo. En la situación prevaleciente a vísperas de la Navidad 1978, sólo la serenidad, el buen juicio y la férrea prudencia



con que el Presidente de la República supo manejar una situación en extremo difícil, lograron evitar que, ante provocaciones que se tornaban cada vez más agresivas, Chile las respondiera en especie.

El Primado de la Iglesia Católica argentina, el Cardenal Primatesta, advirtió en tales momentos: "Un enfrentamiento armado entre Argentina y Chile no constituiría un conflicto entre ambos países; sería una guerra continental".

Gracias a Dios, cuando el vértigo guerrero ya parecía irrefrenable en ciertos sectores castrenses del país vecino, la tan sabia como oportuna intervención del Sumo Pontífice hizo posible alejar primero y luego superar el horror de una guerra que, sin duda, habría destruido tal vez para siempre la convivencia pacífica en América.

### El Amparo Moral de la Santa Sede

El Tratado de Paz y Amistad de 1984 se inicia con una invocación sorprendente para los tiempos que corren, pues indica que se suscribe: "En nombre de Dios Todopoderoso".

Sin embargo, tal encabezamiento no es inusual en los tratados con Argentina. En efecto, los tratados anteriores de mayor trascendencia y permanencia en nuestras relaciones contienen invocaciones del mismo orden. El Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación celebrado en 1855 que, como se ha dicho, jamás perdió vigencia en sus cláusulas tocantes a la solución pacífica de cualquier diferendo, fue celebrado "En el Nombre de la Santísima Trinidad". A su vez, el Tratado de Límites de 1881, sin duda la pieza clave para la definición de las respectivas jurisdicciones territoriales, comienza, al igual que el reciente, conjurando el "Nombre de Dios Todopoderoso".

Quizás estas apelaciones a la Divinidad puedan parecer a algunos un recurso retórico. Con el debido respeto hacia quienes piensen así, me limitaré a consignar el hecho de que los tratados que las formulan son los que mejor han resistido los avatares de la fortuna.

Pasando a lo propiamente convencional, conviene detenerse en ciertas expresiones del preámbulo, ya que el Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados asigna a tal parte introductoria un valor equivalente al de las cláusulas para determinar la recta inteligencia del total de lo convenido.

En el primer considerando las partes recuerdan haber solicitado a la Santa Sede que actuara como mediador para ayudarlas a establecer una línea que determinara las respectivas jurisdicciones al oriente y al occidente de la misma, "a partir del término de la delimitación existente". Igual referencia a la delimitación existente se encuentra en el Artículo 7 del Tratado. ¿Cómo debe entenderse esta alusión reiterada al mismo concepto? Obviamente, su significado reside en registrar que las partes están acordes en que la delimitación señalada por el laudo de 1977 se encuentra en plena vigencia.

Por si alguna duda se reservare al respecto, aduciéndose que no

se nombra el laudo, el Artículo 11 la excluye al consagrar el mutuo reconocimiento de "las líneas de base rectas que han trazado (las partes) en sus respectivos territorios". Como dichas líneas fueron trazadas por Chile basándose en el laudo y englobaron todos nuestros archipiélagos australes, este precepto no sólo reafirma el respeto de la delimitación hecha por el árbitro en la región del canal de Beagle, sino que asimismo extiende el certificado de defunción de las objeciones que, en lo tocante al total de su trazado, formuló en su momento el gobierno de la revolución argentina.

Otro de los considerandos del preámbulo expresa que "el Tratado de Límites de 1881 y sus instrumentos complementarios y declaratorios" constituyen el "fundamento inmovible de las relaciones entre las dos repúblicas".

Sobre este particular es preciso regresar por un instante al pasado.

En 1893, para resolver las diferencias surgidas entre el experto chileno Barros Arana y el perito argentino Moreno, acerca de por dónde debía correr el límite que el Tratado de 1881 refirió a la cordillera de los Andes, en la parte continental de nuestra vecindad, se celebró un Protocolo complementario. En ese Protocolo se incluyó una disposición que contenía la siguiente frase: "de tal suerte que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, como la República Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacífico". Pasado el tiempo y arribadas las partes a los estrados de la Corte Arbitral, los geopolíticos argentinos basaron el fuerte de su defensa del "principio atlántico" en aquella frase del Protocolo de 1893. El laudo estableció la verdad de las cosas al dictaminar que el alcance de aquella estipulación sólo cabía ser referida al tema entonces en debate, cual era el de definir el límite en la parte continental de nuestra frontera. El dominio de los archipiélagos en que se desmembraba el continente hacia el sur había quedado definitivamente definido en 1881 —no por la línea vertical de la cordillera, que ya en ese sector desaparece para hundirse en las profundidades oceánicas— sino por el canal de Beagle que corre en línea recta de oeste a este y al sur de la cual todas las islas e islotes pertenecen a Chile.

En suma, la referencia que hace el Preámbulo a los instrumentos complementarios, como es el Protocolo de 1893, y a los declaratorios, el más reciente de los cuales es el laudo de 1977, confluyen a establecer la absoluta invalidez del "principio atlántico" y, por ende, de las causales invocadas en la Declaración de Nulidad, pues todas ellas no pasan de constituir los distintos ropajes con que pretendió revestirse al cadáver del dichoso principio.

En otra de sus consideraciones, el Preámbulo menciona que para arribar al Tratado, las partes tuvieron "especialmente en consideración la propuesta del mediador, sugerencias y consejos de 12 de diciembre de 1980". El Artículo 32 de la Convención de Viena confiere a las circunstancias y antecedentes que rodean la celebración de un Tratado el mérito de contribuir a su correcta interpretación.

De esta suerte, si se diere el caso, aquellas "propuestas, sugerencias y consejos" del agosto mediador cabrían ser invocadas para establecer el verdadero significado de lo convenido en 1984, por cierto en cuanto sean atinentes al asunto en que surgiere una discrepancia.

El Artículo 16 dice: "Acogiendo el generoso ofrecimiento del Santo Padre, las altas partes contratantes colocan el presente Tratado bajo el amparo moral de la Santa Sede". Este amparo cubre todo el convenio y está referido, como lo admite la estipulación, a la suprema autoridad espiritual que la cristiandad reconoce a la Santa Sede.

Sin embargo, a mi manera de ver, hay un aspecto, al menos, en que el Tratado atribuye a dicho amparo un papel derechamente contractual. Me explico.

El Tratado dedica varias estipulaciones y dos vastos anexos a describir en detalle el sistema de soluciones pacíficas a que las partes deberán someter "todas las controversias, de cualquier naturaleza, que por cualquier causa hayan surgido o puedan surgir" entre ellas, en cumplimiento de la "obligación de abstenerse de recurrir directa o indirectamente a toda forma de amenaza o uso de la fuerza" (Artículo 2).

En lo substancial, dicho sistema no comporta mayor novedad si se lo compara, por ejemplo, con el Pacto de Bogotá u otros instrumentos de iguales propósitos: el primer paso ha de darse, como es de rigor, en la grada de las negociaciones directas; de fracasar éstas, procederá ir a la conciliación, que esta vez será conducida por una comisión permanente designada ab initio; el escalón final consistirá en el arbitraje a cargo de un tribunal integrado por cinco jueces, que fallará en Derecho, a menos que las partes dispongan otra cosa en el compromiso respectivo.

El Tratado fija el plazo dentro del cual habrán de cumplirse, tanto la negociación directa como la conciliación. Ese factor de por sí ya se aparta de lo usual, pues los demás pactos de parecida índole ofrecen amplios resquicios para que una u otra etapa —o ambas— se prolonguen indefinidamente, a voluntad de la parte adversa a cualquier remedio plausible o —lo que suele ser peor— a voluntad de las potencias extrañas al diferendo, pero que en él tienen un interés propio en juego.

Al nuevo mecanismo de los plazos fijos, el sistema del Tratado de 1982 agrega otro elemento clave: corresponderá a la Santa Sede determinar cuándo, una vez vencidos los plazos prefijados, las partes habrán de someterse sin pausa ni pretextos al imperio del arbitraje en Derecho.

En resumidas cuentas, es a la "Santa Sede" que el sistema de soluciones pacíficas del Tratado de 1984 confía la autoridad de dar por extinguidos los plazos reservados a la negociación directa y, en su caso, a la conciliación, de manera que para ambas partes les sea obligatorio someterse al arbitraje en Derecho.

Hasta donde yo sé —y sobra decir que ignoro mucho— no he

encontrado en el Derecho Internacional contemporáneo un aprovechamiento más sabiamente utilitario del poder espiritual.

El sistema de soluciones pacíficas del Tratado de 1984 está convenido a perpetuidad; ninguna de las partes podrá denunciarlo jamás unilateralmente. La Santa Sede tiene su asiento en un minúsculo territorio de la Ciudad Eterna. Acertada confluencia de la perennidad de ambos factores.

### El Estrecho de Magallanes

Mencioné anteriormente que, a raíz de la Declaración de Nulidad pronunciada por Argentina, tuvo lugar un encuentro privado de los presidentes Pinochet y Videla en el aeropuerto militar de Mendoza y que, al cabo de unos meses, delegaciones de ambos países se reunieron en Puerto Montt. También hice presente el ningún resultado de tales juntas. Ello se debió al malentendido fundamental que yacía bajo las cordiales apariencias que impone el Protocolo. Argentina persistía en la ilusión de que, pese al laudo y acorde a lo perseguido por la Declaración de Nulidad, Chile aceptaría alguna distribución de la propiedad sobre las islas. Nuestros representantes sólo estaban dispuestos a conversar sobre las proyecciones marítimas que arrojaban las tierras de nuestro dominio desde 1881 y que el laudo no había hecho sino confirmar.

Con todo, en Puerto Montt se logró suscribir un acta de circunstancia, que dispuso la formación de dos comisiones.

A la primera se encargó que, dentro de cierto plazo, desactivara los preparativos causantes de la extrema tensión bélica que prevalecía en el momento. A la segunda se encomendó el examen de una lista de los temas fundamentales controvertidos, indicándole el calendario para hacerlo.

La primera comisión logró dar cima a su cometido, al menos en la letra. Vencido el calendario fijado a la segunda, en ésta no se obtuvo acuerdo alguno.

Desde la perspectiva actual, lo que interesa no consiste en recordar aquel fracaso, sino destacar el hecho de que, entre el listado de asuntos a discutir por la segunda comisión, apareciera uno que si bien estaba planteado desde hacía años, había escapado a la atención pública. Su enunciado en el acta respectiva es del siguiente tenor: "Las cuestiones relacionadas con el estrecho de Magallanes que indiquen las partes, considerando los tratados y reglas de Derecho Internacional pertinentes".

"¿Cuestiones relacionadas con el estrecho de Magallanes?", se preguntó más de alguien. ¿Cuáles cabían existir al respecto, dado que Chile había cedido en el Tratado de 1881 sus reclamos sobre la Patagonia, a cambio de permanecer tranquilo en el dominio del Estrecho? La sorpresa y algunas críticas aumentaron al conocerse por conducto de los habituales "trascendidos" de la prensa argentina que la proposición para que el tema fuera tratado por la segunda comisión había provenido de Chile.

Como dije, la verdad es que, al tiempo de la reunión de Puerto Montt, "las cuestiones relacionadas con el estrecho de Magallanes" ya estaban sobre el tapete.

Otra vez es preciso acortar camino a través de la fronda de antecedentes.

Durante un tercio de siglo aproximadamente, esto es, desde 1881 hasta la Primera Guerra Mundial, no hubo cuestión acerca del pleno dominio que sobre ambas riberas del estrecho y, por consiguiente, sus aguas, atribuía a Chile la transacción convenida en aquel año.

Sobrevvenida la conflagración que constituyó un "fratricidio" entre los pueblos de Occidente, Chile se vio en la necesidad de adoptar ciertas medidas para resguardar en el estrecho el régimen de neutralidad perpetua que el Artículo V del Tratado de 1881 le imponía garantizar.

Tales medidas fueron recibidas con reserva por algunos políticos y juristas de nuestro vecino oriental, quienes adujeron que la transacción de 1881 no había atribuido expresamente a nuestro país las aguas de esa vía marítima, por lo cual correspondía considerarlas aguas de alta mar. Tan inaceptable versión de lo convenido fue replicada en forma irredargüible por los chilenos José Guillermo Guerra y Julio Escudero Guzmán. Durante el medio siglo subsiguiente no volvió a plantearse la reserva, al menos oficialmente.

Cuando ocurrió el segundo "fratricidio" de Occidente, esto es, en una época coetánea con la adopción por los círculos geopolíticos argentinos del "principio atlántico", el almirante Segundo Storni sostuvo que el minúsculo tramo de la costa atlántica que media entre punta Dungeness y cabo Vírgenes era parte del litoral del estrecho y, por ende, que Argentina era codueña del mismo.

Al igual de lo acontecido con "el principio atlántico", la tesis del almirante Storni logró ir ganando favor en la Cancillería argentina, hasta erigirse en su postura oficial.

Así lo hicieron ver dos notas presentadas a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores que objetaron las disposiciones dictadas por Chile para proteger la navegación en el estrecho, a raíz del accidente ocurrido al buque tanque "Metula" en septiembre de 1974. En esas notas, Argentina postuló derechamente ser corribereña en la costa norte del estrecho, agregando que, en consecuencia, detentaba la calidad de cogarante en la preservación de su libre navegación y neutralidad. En la Conferencia sobre el Derecho del Mar celebrada en 1982, nuestro vecino notificó a la comunidad internacional la posición descrita.

Hay más. Junto a la "teoría Storni", pronto surgiría otra no menos inusitada.

Según ésta, en la boca occidental del estrecho se registraba hidrográficamente un "delta", del cual formaban parte los canales Abra, Bárbara, Magdalena y Cockburn. En consecuencia, dichos ca-

nales, al ser partes del "delta" occidental del estrecho, estaban abiertos a la libre navegación prescrita en 1881.

La rápida evolución del moderno Derecho del Mar y el progreso aún más vertiginoso de la ciencia y la tecnología para la explotación de las riquezas existentes en el suelo y en el subsuelo marinos, vendrían a complicar las cosas. En 1980 una patrullera de la Armada de Chile intimó el retiro de la plataforma petrolera "Interocean II", que a la sazón iniciaba en la zona la perforación de un pozo de hidrocarburos por contrato con el Gobierno argentino.

Lo relatado hasta aquí resume las razones que fueron poniendo en evidencia que convenía ocuparse de "las cuestiones relacionadas con el estrecho de Magallanes", en el convenio cuya negociación presidía la Santa Sede.

Sin embargo, el Cardenal Samoré se opuso terminantemente a que la mediación se extendiera a tales cuestiones por reputarlas ajenas al encargo recibido.

A lo anterior vino a sumarse la denuncia por el gobierno militar argentino del Tratado de Solución de Controversias que nuestros países habían celebrado en 1972. Sólo a instancias de Chile y, es de suponer, de la presión que el Cardenal Samoré sabía ejercer cuando se lo proponía, dicho gobierno se allanó finalmente a aceptar una prórroga de ese Tratado por seis meses, pero sólo respecto de las materias incluidas en la mediación, vale decir, a contrario sensu, excluidas aquellas objetadas por el delegado de Su Santidad.

A contar de ese momento, en suma, nuestro país quedó advertido que para resolver pacíficamente "las cuestiones relacionadas con el estrecho de Magallanes", no cabía recurrir ni a la mediación ni a la Corte Internacional de Justicia cuya jurisdicción el país trasandino acababa de denunciar.

En tales circunstancias, la delegación argentina propuso "congelar" la consideración de esas cuestiones por el plazo de cinco años. Habida cuenta de la experiencia recogida en otros casos en que se permitió que el tiempo cumpliera la faena de abultar y enconar anteriores entredichos, a nuestros representantes pareció preferible la negociación de inmediato, si no bajo la presidencia pontificia, al menos durante su presencia en la mediación.

Salvo el Jefe de Estado, los miembros de la Junta de Gobierno, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, los ministros de Relaciones Exteriores y nuestros representantes y asesores ante la mediación, el resto de la ciudadanía no dispone hasta la fecha de una información completa sobre las negociaciones que tuvieron lugar al respecto, pues en Chile se ha observado con rigor la reserva exigida inicialmente por el Sumo Pontífice. Por lo tanto, nadie ajeno a ese escaso círculo está en condiciones de poder explicar el desarrollo de las negociaciones concernientes a "las cuestiones" en referencia que tuvieron lugar no bajo la mediación papal, pero sí en la sede pontificia.

A falta de información, debo atenerme, pues, al resultado que registra la transacción de 1984.

Mencioné antes que, una vez notificado el laudo de S. M. Isabel II, el Gobierno chileno procedió a trazar "las líneas de base rectas" que delimitaron consiguientemente los espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional. Dichas "líneas" fueron descritas en el Decreto Supremo N° 416, de 1977. El atribuyó a todos los canales cuya desembocadura se registra al término del sector occidental del estrecho de Magallanes, la calidad de ser "aguas interiores" chilenas. Anoté también que el Artículo 11 del Tratado de 1984 tiene por definitivas las líneas de base rectas dictadas por las partes. La consecuencia lógica inevitable de estas premisas conduce a concluir que tal precepto del Tratado extiende el certificado de defunción de la teoría del "delta" de dominio universal en la boca occidental del estrecho, que propiciaba la dirigencia geopolítica argentina.

Además, ¿qué ocurre en el Tratado con la "teoría Storni", relativa a sostener que a Argentina correspondía la calidad de codueña de un sector en la embocadura oriental del estrecho y, por lo mismo, de ser cogarante de su neutralidad y libre navegación? El Tratado también desautoriza expresamente los supuestos y las consecuencias de dicha teoría.

Veamos.

El Artículo 10 previene que las partes reconocen que en "el término oriental del estrecho de Magallanes determinado por punta Dungeness en el norte y cabo del Espíritu Santo en el sur, el límite entre sus respectivas soberanías será la línea recta que une 'el hito ex baliza Dungeness', situado al extremo de dicho accidente geográfico, y 'el hito I cabo del Espíritu Santo' en Tierra del Fuego".

Vale decir, que dicho término del estrecho se registra precisamente en los dos puntos que Chile había sostenido desde siempre ser los determinantes para definir su boca sobre el Atlántico. Ambos puntos pertenecen a Chile y, por consiguiente, dicho artículo destituye de todo fundamento tanto la pretensión argentina de su copropiedad como la de su cogarantía.

Luego de conocerse el Tratado de 1984, voces respetables han objetado la línea descrita sobre las aguas para definir las respectivas soberanías sobre el mar, suelo y subsuelo al oriente y al occidente de su trazo y sostenido que dicha línea comporta una renuncia por Chile a las proyecciones que —acorde al moderno Derecho del Mar— le corresponde reclamar sobre las aguas, suelo y subsuelo del Atlántico, en razón de pertenecerle las tierras de las dos riberas de la boca oriental.

Consultada esa objeción en fuentes responsables, se me ha indicado que expertos de gran autoridad en el nuevo Derecho del Mar sugirieron en su momento cinco trazados, a lo menos, para delinear las posibles proyecciones en cuestión. Ello demuestra, en mi concepto, una simple verdad: cabalmente por ser "nuevo", el Derecho del Mar que trabajosamente fue discutido y negociado por décadas

en reuniones internacionales que culminaron en la reciente Conferencia de Jamaica, tal Derecho dista de poseer aún la certeza que se obtendrá sólo una vez que, con el transcurso del tiempo, la jurisprudencia internacional haya unificado los criterios que presidirán su aplicación.

Sea como fuere, el hecho es que la línea objeto de las referidas críticas coincide con la aceptada por Chile desde las postrimerías del siglo XIX hasta fechas contemporáneas.

Así, a fines de ese siglo, los peritos chilenos Diego Barros Arana y Alejandro Bertrand y los argentinos Francisco P. Moreno y Diego González insinuaron en un mapa con una línea de puntos el límite de la boca oriental del estrecho. Esa línea partía desde los mismos hitos señalados en el Tratado de 1984 y se orientaba en iguales direcciones. Es cierto que los puntos no se completaban en la sección central, pero no resulta justificado atribuir su falta a un propósito de quebrar la orientación prefijada por los puntos que los propios peritos inscribieron en aquella carta.

Algunos mapas chilenos de la época recogieron ese trazado, como el publicado en la *Geografía Descriptiva de la República de Chile*, editada en 1897 por don Enrique Espinoza. Otro fue el *Atlas Escolar de Chile* de don Julio Montebruno López, editado en 1903. Hay obras extranjeras que también lo reproducen y que vieron la luz en Francia, Dinamarca y Alemania.

Ya en esta centuria, en fecha tan próxima como el año 1972, al responder a una consulta de la Enap, nuestra Dirección de Fronteras y Límites señaló que para los efectos de la exploración de hidrocarburos en la plataforma submarina de la zona, dicha empresa chilena no debía sobrepasar la línea imaginaria de unión entre punta Dungeness y el cabo del Espíritu Santo.

Es de presumir, asimismo, que igual concepción de la línea limítrofe determinó que Chile se limitara a tomar nota —en lugar de objetar— el trazado de construcción del gasoducto que va desde cabo Espíritu Santo a cabo Vírgenes, cuando en 1978 la Empresa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina dio conocimiento a nuestro Gobierno del proyecto respectivo.

La "teoría Storni" en particular y "el principio Atlántico" en general ofrecían, entre otras consecuencias inaceptables para Chile, el peligro de dejar en manos extranjeras el control del acceso y de la salida del estrecho de Magallanes, desde y hacia el Atlántico.

La preocupación ante ese peligro no es nueva. Ya Ercilla registró en su poema el vano intento desplegado por la Corona por mantener en secreto la vía interoceánica recién descubierta por Hernando de Magallanes, para evitar que se le disputara su propiedad y provecho:

"Por falta de piloto, o encubierta"  
"causa, quizás importante y no sabida,"  
"esta secreta senda descubierta"



"quedó para nosotros escondida:"  
"ora sea yerro de la altura cierta,"  
"ora que alguna isleta removida"  
"del tempestuoso mar y viento airado,"  
"encallando en la boca, la ha cerrado."

Con los adelantos introducidos por la ciencia y la técnica en "el arte" de la guerra, bien sabemos que no sería ahora preciso remover "alguna isleta" para bloquear esta senda que, pronto después de su descubrimiento, no tardarían en utilizar con suculento beneficio los corsarios adversos a la Corona que intentó encubrirla bajo el sigilo.

De aquí, pues, que el Artículo 10 del Tratado de 1984, luego de reiterar la plena vigencia de la neutralidad y libre navegación del estrecho, termine disponiendo: "La República Argentina se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstancias, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el estrecho de Magallanes".

### Las Tareas del Futuro

Advertí de inicio que, si bien se mira, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 consiste primordialmente en una transacción destinada a resolver diferendos heredados del siglo anterior, que el transcurso del presente no había hecho sino acrecentar en dimensión, exponiendo en ocasiones a los dos pueblos a desastrosos desenlaces.

Cumplido el objetivo de darles una solución definitiva y de disponer, al propio tiempo, un sistema obligatorio y perpetuo para solucionar pacíficamente toda ulterior discrepancia, el Tratado de 1984 dedica un precepto a la cifra del futuro: la cooperación económica y la integración física. El Artículo 12 encomienda esta tarea a una comisión binacional permanente y enuncia algunos de los temas en que recaerá su cometido: un sistema global de enlaces terrestres; habilitación mutua de puertos y zonas francas; complementación turística, etc.

Nadie podrá esperar que procure ofrecer siquiera una sinopsis de las cuestiones que envolverá la ejecución de tal encargo. La imposibilidad de intentarlo queda de manifiesto con la cita de un simple antecedente. En abril del año en curso, doña Eliana D. de Prebisch, asesora del Instituto para la Integración de América Latina (Intal), preparó una lista de los títulos de los convenios, acuerdos, declaraciones, etc., suscritos entre Chile y Argentina en materias relacionadas con el comercio y la cooperación mutuos. Su número, a contar sólo desde 1938, excede de los 80 instrumentos.

Excluida, por consiguiente, la posibilidad —y, en rigor, la utilidad— de acometer esa tarea, me limitaré a insinuar ciertas ideas que

en buena parte no provienen de mi autoría, sino de las respuestas que, en busca de sugerencias creativas al respecto, he obtenido en el último tiempo de tres jóvenes que bien saben cómo responder. . . cuando alguien se ocupa de interrogarlos.

Me pareció de interés hacerlo por dos razones: a) porque es obvio que en definitiva incumbirá a su generación y a las siguientes —tanto en Chile como en Argentina— el peso principal de trasladar los propósitos a la realidad de una complementación plausiblemente concebida y eficientemente realizada, y b) porque los consultados son científicos que, pese a las invitaciones recibidas de las célebres universidades extranjeras en que perfeccionaron con distinción sus estudios de "post-grado", resolvieron patrióticamente rechazarlas para regresar aquí a entregar su aporte.

Esta última razón me conduce a mencionar un asunto que me inquieta desde antiguo. Me refiero al que la jerga en uso denomina "la fuga de cerebros". Los científicos de Argentina y Chile encabezan el lote de los latinoamericanos que no vuelven. Alguna vez, hace años, destiné el ocio que me permitía en sábados y domingos la atención de los deberes inherentes al desempeño de la Embajada de Chile en Washington, a estudiar la dimensión y las causas de tal fenómeno. La Organización de Estados Americanos juzgó de interés publicar el modesto ensayo en que registré lo averiguado. Permítaseme reproducir ahora una de las conclusiones a que llegué en el trabajo editado entonces: no es por codicia del mejor dinero, ni por la fácil disponibilidad del más moderno instrumental ni siquiera por el relumbré de la mayor fama o prestigio, que la "élite" de nuestros jóvenes talentos científicos a menudo resuelve permanecer en los centros académicos del exterior en que han optimizado la formación recibida en Chile o Argentina. La razón determinante con frecuencia se condensa en una pregunta: "¿y. . . de qué manera útil podría yo invertir en Chile (o Argentina) lo que aquí he aprendido?".

Al hablar de "útil", no necesariamente aluden a la facilidad para aplicar de inmediato la plenitud de todos los nuevos conocimientos adquiridos. A menudo les bastaría que se les garantizara la libertad para innovar en las condiciones existentes que, a su manera de ver, tornan inamovible el retraso.

Hecha la disgresión, paso a engazarla con el asunto en comentario.

Hay dos opciones para apostar sobre el futuro de la complementación bilateral que contempla el Artículo 12 del Tratado de 1984.

La una se propone ampliar la efectividad de lo intentado, que en amplia medida retratan los 80 instrumentos a que aludí hace un momento. Esto es, la apuesta se remite a pretender incrementar y perfeccionar las iniciativas de complementación física y comercial ya concebidas y que permanecen en embrión o, en todo caso, en un estado de avance insatisfactorio.

Sin desconocer la necesidad y utilidad de llevar tales iniciativas

a su plena maduración, la otra apuesta va más allá. Ella, en efecto, llama a los gobiernos, empresarios, universidades, etc., de los dos países a que se empeñen por encarar juntos el desafío en que, sin duda, radica la clave del futuro: el desarrollo científico y tecnológico.

Todas las sugerencias recibidas de mis jóvenes interlocutores apuntan en esa dirección. No me ha sorprendido detectar en sus opiniones una peculiar prescindencia de consideraciones "chauvinistas".

El decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Dr. Camilo Quezada Bouey, piensa que es preciso arribar pronto a lo que, según le entiendo, debiera erigirse en un plantel común de científicos.

La posibilidad de conseguirlo la asienta en la realización de importantes encuentros entre investigadores de uno y otro lado de la cordillera, que han tenido lugar incluso en momentos en que la tensión entre nuestros países atravesó por etapas críticas. Por ejemplo, señala el Dr. Quezada:

1 Desde el año 1977 se viene trabajando en conjunto sobre proyectos de investigación en física nuclear ("Estudio teórico de colisiones de iones pesados con núcleos deformados"). Participan investigadores argentinos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y académicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Se realizan visitas de físicos argentinos a Chile y en la dirección inversa, con utilización de laboratorios de ambos países.

2 Desde 1979 a la fecha ha existido un nutrido intercambio de investigadores de ambos países en otros campos de la física.

3 Desde hace varios años se ha verificado un "Coloquio Chileno-Argentino de Algebra", alternativamente en uno y otro país. La participación es numerosa. En este "coloquio" ha colaborado en forma importante el doctor en Matemáticas Sr. Orlando Villamayor, ex presidente de la Conicet argentina.

4 Durante la primera mitad de la década de 1970, la Universidad de Buenos Aires recibió numerosos becados chilenos, que acudieron a esa universidad para obtener grados académicos en Matemáticas. Posteriormente, el avance logrado por los programas chilenos hizo innecesario mantener esta iniciativa.

5 Académicos chilenos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas han ido a Bariloche a seguir cursos sobre energía y participado en discusiones con sus colegas trasandinos para modernizar la enseñanza de la ingeniería.

Paso a referirme a las ideas de otro miembro de la cofradía. El secretario de la Comisión Nacional de Energía y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, Sr. Bruno Philippi, dirige sus sugerencias a proyectos concretos. Distingue entre "los más viables", esto es, ya estudiados y realizables a corto pla-

zo, y los "hipotéticos" que, con el pragmatismo que caracteriza a las nuevas mentalidades, designa a aquellos que requieran de mayor análisis.

Resumiré sus apreciaciones —y las de sus colaboradores— respecto de los proyectos pertenecientes a la primera clasificación.

1 Interconexión eléctrica entre el sistema interconectado central y el sistema Cuyo (Mendoza), mediante una línea de 220KW a través de la cordillera (valle del Aconcagua, Portillo, Túnel Caracoles, Las Cuevas, Potrerillos, Mendoza). La factibilidad técnica y económica del proyecto fue estudiada conjuntamente por Chile y Argentina en el período 1972-1976 (obsérvese la "independencia" del período del estudio respecto de las circunstancias políticas imperantes en el momento).

Las conclusiones fueron ampliamente favorables a la ejecución del proyecto. Sin embargo, el Sr. Philippi cree indispensable actualizar aquel estudio y, en especial, lograr el correspondiente asenso político entre ambos gobiernos para su realización.

2 Acuerdos para facilitar el desarrollo de recursos hidroeléctricos en centrales que utilizarían aguas provenientes de recursos hidrográficos compartidos con Argentina.

Las principales cuencas hidrográficas en que es dable desarrollar importantes proyectos hidroeléctricos dependientes de recursos hidrográficos compartidos chileno-argentinos son siete y están entre las latitudes aproximadas de 39° 30' y 50° 45' de latitud sur. Son las siguientes: 1) Valdivia; 2) Puelo; 3) Yelcho; 4) Palena; 5) Baker; 6) Pascua y 7) Santa Cruz.

Las seis primeras cuencas desembocan en el océano Pacífico y la séptima —Santa Cruz— en el Atlántico. En otras palabras, en la mayoría de los casos, Chile es país de aguas abajo y sólo en la del Santa Cruz, lo es de aguas arriba. Cabe destacar las siguientes particularidades: que en el caso del Palena aparece una zona del lago Palena (cortado por el límite) en que Chile es país de aguas arriba; que existen importantes lagos fronterizos —asimismo cortados por la frontera— en las cuencas del Baker y Pascua, que descargan sus aguas por ríos chilenos al Pacífico y que reciben sólo pequeños aportes de agua desde territorio argentino.

El potencial hidroeléctrico para Chile de estas cuencas se estima en ser del orden de 7.000 MW y 50.000 GWh/año. Esto representa una alta proporción (55%) de la reserva de recursos hidroeléctricos de nuestro país (unos 17.000 MW y 90.000 GWh/año). De aquí la necesidad de lograr que su aprovechamiento no se vea obstaculizado por desentendimientos con el país vecino. Cabe subrayar que se trata de recursos energéticos renovables y cuyo aprovechamiento sería de enorme importancia para el desarrollo del sector eléctrico chileno, pues es dable estimar que en unos 30 años más se necesitará utilizar la mayor parte de ese potencial.

3 Acuerdos para uso compartido de gas natural en la zona sur,

mediante la instalación de plantas financiadas por el sector privado de ambos países.

4 Transporte por gaseoducto de gas chileno a través de territorio argentino, con entrega en la zona Central de Chile. O bien, intercambio del gas de Magallanes por gas argentino en el norte.

El tercero de mis entrevistados fue el doctor en Geografía de la Universidad de Heidelberg, Sr. Ricardo Riesco, hoy decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile.

Esta vez, nuestras conversaciones recayeron sobre temas más próximos a lo leído y entrevistado durante los años en que ejercí la cátedra de Derecho Internacional Público, en la Universidad Católica de Chile.

Hablamos sobre las proyecciones de la cooperación chileno-argentina en la exploración y explotación de los espacios oceánicos y la Antártida.

De las cuestiones de que Chile debe ocuparse, sin desmedro de su soberanía y con provecho para su economía, en ambos ámbitos, han escrito con lucidez los académicos Sres. Martínez Sotomayor, quien preside nuestra Academia, y sus miembros Sres. Orrego Vicuña y Herrera Lade.

Aprecié que, como geógrafo, el decano Riesco las sitúa en una dimensión universal. Procuraré reducir sus conceptos a lo esencial.

A su juicio, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 brinda la posibilidad de que Chile desempeñe un papel significativo en los dos últimos grandes ámbitos geográficos aún no apropiados por los mayores centros de poder que actúan en el planeta.

En efecto, el dominio del cuadrante sur-oriental del océano Pacífico y del continente antártico está por decidirse. Y, por lo tanto, será arduamente disputado en el futuro próximo.

No es todo el océano Pacífico lo que estará en juego. El Pacífico Norte ya ha sido adjudicado. Comercial, económica y estratégicamente se encuentra bajo el control de los EE. UU., Japón y las naciones del sudeste asiático. Y, en menor medida, por EE. UU., Australia y Nueva Zelanda.

Las áreas que todavía carecen de "dueño" son el océano Pacífico sur y la Antártida. Chile ocupa un lugar de privilegio en la primera. Con Argentina compartimos una ubicación muy ventajosa respecto de la segunda.

Las aguas internacionales del océano Pacífico sur tienen una superficie de 25 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente. Representan una superficie geográfica superior a la de Europa, medida desde los Urales hasta Portugal. Y contiene las más importantes reservas mundiales en recursos naturales renovables y no renovables.

Específicamente, en el océano Pacífico se encuentran las mayores reservas de los diez recursos estratégicos convencionales que,

según los expertos, debe poseer un país para alcanzar y consolidar un desarrollo industrial progresivo. El Pacífico encierra el 62% de las reservas mundiales de fierro; el 98% de las de molibdeno; el 62% de las de cobre; el 60% del fósforo prospectado y evaluado; el 77% de asbesto, el 52% de gas y el 85% de carbón.

Si se tiene en cuenta que los océanos mundiales ocupan 350 millones de kilómetros cuadrados, quizá sorprenda saber que una vez que a esa superficie se le resta el área abarcada por las 200 millas de Mar Patrimonial aceptada hoy mayoritariamente por los países miembros de Naciones Unidas, quedan sólo 70 millones de kilómetros cuadrados de océanos internacionales. Pues bien, de ese saldo, la mitad, o sea, 35 millones de kilómetros cuadrados corresponden al Pacífico y, de esa superficie, las dos terceras partes pertenecen al Pacífico sur.

La escala de magnitud del espacio antártico no es menor. La superficie de ese continente alcanza a los 34 millones de kilómetros cuadrados. Casi duplica la de Sudamérica.

Las oportunidades para Chile y Argentina en relación a la Antártida, provienen de que ambos países son los más cercanos a la península antártica, que hoy por hoy es la única puerta de entrada terrestre al misterio —y los recursos— que encubre el continente helado.

El protagonismo en el progreso que las posiciones descritas acuerdan a Chile en el Pacífico Sur y tanto a nuestro país como a la Argentina en la Antártida; la magnitud de las áreas en juego, y el tamaño en recursos materiales y en desarrollo científico que requerirá detectarlas y aprovecharlas a tiempo, hacen indispensable que ambos países acometan desde ya la elaboración en común de estrategias globales y proyectos específicos para actuar en múltiples campos en que la unión les brindará la fuerza de que obviamente carecen si actúan por separado.

En conclusión, luego de recorrer el larguísimo e inquietante camino de una rivalidad que devenía cada vez más anacrónica, el Tratado de 1984 ofrece por fin a Chile y Argentina la oportunidad de encarar juntos los desafíos que les plantea el siglo XXI. ¿Sabremos ser lo suficientemente "patrióticos", en la dimensión que requieren los tiempos, para aprovecharla? Dios dirá.

Las generaciones a que correspondió consolidar la tarea de "dar expresión a las aspiraciones de paz de ambos pueblos", según reza el Preámbulo del Tratado de 1984, han completado su jornada de trabajo. La que sigue es de responsabilidad de quienes en ambos pueblos sepan salir al quehacer con la luz de esta alborada.